

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA.

Veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

RADICACIÓN	47-001-31-05-005-2025-10010-00.
ACCIÓN	TUTELA.
ACCIONANTE	DEYMER DAVID VILLALBA LUNA.
ACCIONADOS	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC Y LA UNIVERSIDAD LIBRE.

Evacuadas las etapas procesales dispuestas en el Decreto 2591 de 1991 y al no observarse causal de nulidad que invalide lo actuado, esta Judicatura procede a dictar sentencia en primera instancia, para decidir las pretensiones de la acción de tutela promovida por DEYMER DAVID VILLALBA LUNA contra la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC Y LA UNIVERSIDAD LIBRE.

I. ANTECEDENTES

A. TRÁMITE.

La demanda tutelar fue recibida a través del correo electrónico institucional del Despacho el trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025), siendo admitida por auto el mismo día. La parte accionada se notificó en debida forma, conforme lo dispone el artículo 16° del Decreto 2591 de 1991, concediéndose el término de dos (2) días para que rindiera un informe detallado acerca de los hechos y pretensiones aducidos por el accionante.

B. LA DEMANDA.

1. FUNDAMENTOS FÁCTICOS.

Manifiesta DEYMER DAVID VILLALBA LUNA los siguientes hechos relevantes:

- Indica que participó en el concurso de méritos denominado Convocatoria No. 2502 al 2508 de 2023 – Superintendencias, para el cargo identificado con el código OPEC No. 205802, denominado TECNICO OPERATIVO, Código 3132, Grado 18, ofertado en la modalidad de concurso abierto por COMISIÓN NACIONAL DEL

SERVICIO CIVIL – CNSC y LA UNIVERSIDAD LIBRE, en el Proceso de Selección No. 2502 al 2508 de 2023 – Superintendencias.

- Indica que en los resultados reflejados el 29 de enero de 2025 ocupó el 184 en la calificación de Valoración de Antecedentes con puntaje de 60 y el lugar 36 con una calificación total de 86.17.
- Manifiesta que de la revisión de los ítems observa que certificado TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS DE GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL fue tenido en cuenta bajo el siguiente argumento: “Documento válido para la asignación de puntaje en el ítem de Educación Formal. vedf.”, recibiendo una calificación de 10 puntos.
- Alega que, de acuerdo con lo expresado en el anexo técnico en su numeral 7.3 y de acuerdo con el certificado TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS DE GESTION PUBLICA TERRITORIAL debe ser validado y calificado con un puntaje de 15 puntos.

2. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicita la protección efectiva de los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al acceso a cargos públicos. En consecuencia, se ordene a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y la UNIVERSIDAD LIBRE procedan a asignarle una calificación de 65 puntos en la valoración de antecedentes. Adicionalmente, se solicita la corrección de la calificación en la sumatoria de los puntajes obtenidos en el concurso, la cual, al momento de este reclamo, se encuentra en 86.17 puntos, y que se ajuste a 86.67 puntos. Como consecuencia de ello, también indica se debe corregir la posición en el listado de puntajes de los aspirantes al empleo que aún continúan en el proceso de selección, la cual, en el momento de este reclamo, está ubicada en la posición 36, para que se le asigne la posición 14.

C. INTERVENCIÓN DE LAS DEMANDADAS.

➤ UNIVERSIDAD LIBRE.

Indicó que, el accionante efectivamente presentó reclamación dentro de los términos indicados previamente, la cual fue resuelta de fondo en respuesta publicada a través del aplicativo SIMO el pasado 29 de enero de 2025.

En respuesta al requerimiento puntual de otorgar puntaje al CERTIFICADO DE TÉCNICO PROFESIONAL EN PROCESOS DE GESTIÓN PUBLICA TERRITORIAL, manifestó que, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo a los Acuerdos del Proceso de Selección, la educación formal no finalizada es calificada de tal manera que el accionante obtuvo 10 puntos, debido a que se allegó certificado y no el título del programa.

En consecuencia, determina que no es procedente acceder a lo pretendido, ya que debe respetarse lo establecido en el Acuerdo del Proceso de Selección y su Anexo Técnico, toda vez que son las normas que regulan el concurso, las cuales son de obligatorio cumplimiento para todos los concursantes, entidades e instituciones que participen en este Proceso de Selección por Mérito, de conformidad con el numeral 1° del artículo 31 de la Ley 909 de 2004; y ya que acceder a la solicitud implicaría vulnerar el principio de igualdad que rige el proceso y por medio del cual se debe garantizar que todos los aspirantes tengan acceso a la misma información y al mismo trato.

➤ **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL- CNSC.**

Indicó que la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- en uso de sus competencias constitucionales y legales, adelanta el Proceso de Selección No. 2502 de 2023, en la modalidad de concurso ascenso y abierto para proveer por mérito, las vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa pertenecientes a la planta de personal de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, proceso que integra la Convocatoria de Superintendencias 2023, para tal efecto expidió el Acuerdo No. 60 del 13 de julio de 2023, modificado mediante el Acuerdo No. 67 del 11 de agosto de 2023.

Explicó que es improcedente, porque la parte accionante podía debatir la pretensión formulada por vía de tutela ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, en este escenario judicial, exigir el decreto de medidas cautelares.

Por lo tanto, se dispone que la Universidad Libre, como operador contratado para ejecutar el presente proceso de selección, está procesando los resultados de las pruebas aplicadas de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1.4 del anexo del acuerdo de convocatoria, en relación con las reclamaciones respecto a los resultados de las pruebas escritas. Por consiguiente, el operador adelantará la etapa de reclamaciones una vez se publiquen los resultados, motivo por el cual, la presente acción de tutela se torna improcedente por incumplimiento de los requisitos de residualidad y subsidiariedad. En este orden, concluyó que los aspirantes cuentan con la reclamación como medio para elevar sus inconformidades frente a las pruebas aplicadas; siendo, por tanto, la tutela improcedente, ya que, de acceder a lo pretendido, se daría un trato de favorabilidad que desconocería los derechos a la igualdad de los demás concursantes en el proceso de selección, así como el principio del debido proceso que rige en las actuaciones del concurso de méritos.

II. CONSIDERACIONES DEL JUZGADO.

A. PRESUPUESTOS PROCESALES.

Los presupuestos de competencia (artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el segundo inciso del numeral 1° del Decreto 1382 del

2000), capacidad para ser parte (artículos 1°, 5°, 10° y 13° del Decreto 2591 de 1991), y petición en forma (artículo 14 ídem), se encuentran reunidos debidamente, y no se observa causal alguna de nulidad que invalide lo actuado.

B. PRUEBAS.

A favor de la parte accionante:

- Pantallazo de la pagina SISTEMA DE APOYO PARA LA IGUALDAD, EL MÉRITO Y LA OPORTUNIDAD – SIMO.
- Certificado TÉCNICO PROFESIONAL EN PROCESOS DE GESTION PUBLICA TERRITORIAL.
- Cédula.

A favor de la parte accionada la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO:

- Anexos de representación.

A favor de la parte accionada COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL:

- Resolución No. 16574 del 22 de noviembre del 2024, que acredita la personería jurídica para intervenir en nombre de la CNSC.
- Nro. de Reclamación SIMO 953492633.
- Acuerdo número 60 del 13 de julio de 2023.
- Acuerdo número 67 del 11 de agosto de 2023.
- Acuerdo número 70 del 11 de agosto de 2023.
- Anexo por el cual se establecen las especificaciones técnicas de las diferentes etapas del Proceso de Selección Superintendencias de la Administración Pública Nacional.
- Auto número 423 del 04 de octubre de 2024.
- Auto número 440 del 21 de octubre de 2024.
- Guía de orientación al aspirante (GOA) para la aplicación de la prueba escrita y el acceso al material de aplicación.
- Fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado Santiago de Cali radicado T-76-001-31-07-001-2024-00097-00.

Prueba de oficio:

- Constancia del proceso de radicado 11001032500020240046800 expedida por el Consejo de Estado.

C. PROBLEMA JURÍDICO.

De conformidad con la situación fáctica planteada, corresponde al Despacho establecer si la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL se encuentran vulnerando los derechos fundamentales al trabajo, debido proceso, y al

acceso a cargos públicos, cuya protección demanda DEYMER DAVID VILLALBA LUNA.

D. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

La Constitución Nacional de 1991 en su artículo 86 contempla:

"Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública..."

Así mismo la norma indica que sólo procederá esa acción cuando el afectado no disponga de otro medio de acción judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el Juez Constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del Artículo 86 de la Carta y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en existencia de legitimación por activa y por pasiva; afectación de derechos fundamentales; instauración del amparo de manera oportuna (inmediatez); y agotamiento de los mecanismos judiciales disponibles, salvo que se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable o que tales vías sean inexistentes o ineficaces (subsidiariedad).

Así, en primer lugar, el operador jurídico debe determinar si la persona que interpone el amparo tiene interés jurídico para hacerlo y a su vez si contra quien se dirige es un sujeto demandable a través de la acción de tutela. En ese sentido, el Artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 señala que la demanda podrá ser presentada directamente por la persona que considere vulnerados sus derechos fundamentales o a través de su representante. Asimismo, indica que es posible agenciar derechos ajenos cuando su titular no esté en condiciones de promover su propia defensa. A la par, según el Artículo 42 del mismo Decreto, el recurso de protección podrá interponerse contra el actuar u omisión de cualquier autoridad e incluso de los particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.

En segundo lugar, el Juez Constitucional debe examinar si existe una afectación de derechos fundamentales, teniendo en cuenta que la acción de tutela tiene como objeto la protección de éstos cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados, por lo cual no resulta viable en los casos en que el amparo (ii) no tenga como pretensión principal la defensa de garantías

superiores o (ii) la acción u omisión que atenta contra las mismas no sea existente, es decir, el amparo carezca actualmente de objeto.

En relación con la segunda situación, esta Corporación ha sostenido que cuando hechos sobrevinientes a la instauración de la acción de tutela, alteran de manera significativa el supuesto fáctico sobre el que se estructuró el reclamo constitucional, al punto que desaparece todo o parte principal de su fundamento empírico, decae la necesidad de protección actual e inmediata que subyace a la esencia del amparo. A este fenómeno la Corte lo ha denominado carencia actual del objeto, el cual se presenta de diferentes maneras, destacándose el hecho superado y el daño consumado.

Así, se presenta un hecho superado cuando los actos que amenazan o vulneran el derecho fundamental desaparecen, al quedar satisfecha la pretensión de la acción de tutela, lo que conlleva a que ya no exista un riesgo; por tanto, la orden a impartir por parte del juez constitucional, en principio, pierde su razón de ser, porque no hay perjuicio que evitar.

Bajo esta hipótesis la Corte ha procedido a prevenir al demandado sobre la obligación de proteger el derecho en una próxima oportunidad, de conformidad a lo establecido en el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, y a declarar la carencia actual de objeto, absteniéndose de impartir orden alguna. No obstante, según lo dispuesto en el Artículo 26 del mencionado Decreto, el expediente podrá reabrirse en cualquier tiempo, si se demuestra que la satisfacción extraprocesal de los derechos reclamados por el interesado ha resultado incumplida o tardía.

Por otro lado, la carencia actual de objeto por daño consumado se presenta cuando la vulneración o amenaza del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro y lo único que procede es el resarcimiento del daño originado en la vulneración del derecho fundamental.

En tercer lugar, conforme al Artículo 86 de la Constitución Política que dispone que la acción de tutela está prevista para la “*protección inmediata*” de los derechos fundamentales, el funcionario judicial debe verificar que el amparo sea utilizado para atender vulneraciones que requieren de manera urgente la intervención del juez de tutela.

Al respecto, esta Corporación ha reconocido excepciones al presupuesto de inmediatez, cuando se demuestra que la vulneración es permanente en el tiempo y que, aunque el hecho que dio lugar a la misma es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable de la accionante derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual.

Finalmente, en cuarto lugar, es obligación del juez que estudia la procedencia de la acción de tutela tener en cuenta que ésta es mecanismo

sumario y preferente creado para la protección de los derechos fundamentales, que se caracteriza por tener un carácter residual o supletorio, obedeciendo a la necesidad de preservar las competencias atribuidas por el legislador a las diferentes autoridades judiciales a partir de los procedimientos ordinarios o especiales, en los que también se protegen derechos de naturaleza constitucional.

Por lo anterior, el recurso de amparo no puede convertirse en un mecanismo alternativo, sustitutivo, paralelo o complementario de los diversos procedimientos judiciales, salvo que dichas vías sean ineficaces, inexistentes o se configure un perjuicio irremediable. En relación con este último, esta Colegiatura ha determinado que se configura cuando existe el riesgo de que un bien de alta significación objetiva protegido por el orden jurídico o un derecho constitucional fundamental sufra un menoscabo. En ese sentido, el riesgo de daño debe ser inminente, grave y debe requerir medidas urgentes e impostergables. De tal manera que la gravedad de los hechos exige la inmediatez de la medida de protección.

E. MARCO JURÍDICO Y JURISPRUDENCIAL.

➤ PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN EL MARCO DE CONCURSOS DE MÉRITOS.

La Corte Constitucional ha establecido que, por regla general, la acción de tutela no procede contra los actos administrativos dictados dentro de un concurso de méritos, por cuanto el afectado puede acudir a los medios de defensa disponibles en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para el efecto. Además, con la expedición de la Ley 1437 de 2011, los demandantes pueden solicitar la adopción de medidas cautelares de todo tipo (preventivas, conservativas, anticipadas o de suspensión) cuyo contenido de protección es amplio y admiten su concurrencia dependiendo del caso, con lo cual se pretende garantizar el acceso material y efectivo a la administración de justicia.

Con todo, desde una perspectiva general, la Corte también ha sostenido que, pese a la existencia de las vías de reclamación en lo contencioso administrativo, existen dos hipótesis que permiten la procedencia excepcional de la acción de tutela. La primera, se presenta cuando existe el riesgo de ocurrencia de un perjuicio irremediable, causal que tiene plena legitimación a partir del contenido mismo del artículo 86 del Texto Superior y, por virtud de la cual, se le ha reconocido su carácter de mecanismo subsidiario de defensa judicial. Y, la segunda, cuando el medio existente no brinda los elementos pertinentes de idoneidad y eficacia para resolver la controversia, a partir de la naturaleza de la disputa, de los hechos del caso y de su impacto respecto de derechos o garantías constitucionales.¹

¹ Sentencia T-340 de 2020.

Sobre esta última hipótesis, en la Sentencia T-059 de 2019 el Alto Tribunal de lo Constitucional adoctrinó:

“Las acciones de tutelas que se interponen en contra de los actos administrativos que se profieren en el marco de concursos de méritos, por regla general, son improcedentes, en tanto que existe la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, en el marco de ésta, la posibilidad de solicitar medidas cautelares. Sin embargo, al juez constitucional le corresponde, establecer si esas medidas de defensa existentes en el ordenamiento jurídico son ineficaces, atendiendo a las particularidades del caso en concreto puesto en su conocimiento. (...)”

“Particularmente, cuando se trata de concursos de méritos, la jurisprudencia ha sido consistente en afirmar que los medios de defensa existentes ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no siempre son eficaces, en concreto, para resolver el problema jurídico planteado, pues generalmente implica someter a ciudadanos que se presentaron a un sistema de selección que se basa en el mérito a eventualidades, tales como que (i) la lista de elegibles en la que ocuparon el primer lugar pierda vigencia de manera pronta o, (ii) se termine el período del cargo para el cual concursaron, cuando éste tiene un periodo fijo determinado en la Constitución o en la ley. En ese sentido, la orden del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no estaría relacionada con la efectividad del derecho al acceso de cargos públicos, sino que implicaría una compensación económica, situación que [,] a todas luces, no implica el ejercicio de la labor que se buscaba desempeñar y significa consolidar el derecho de otra persona que, de acuerdo con el mérito, no es quien debería estar desempeñando ese cargo en específico. (...)”

“Por último, es importante poner de presente que, pese a que se podría sostener que la pretensión de la acción de tutela, se podría satisfacer mediante la solicitud de medidas cautelares, lo cierto es que en el fondo se plantea una tensión que involucra el principio de mérito como garantía de acceso a la función pública y ello, a todas luces, trasciende de un ámbito administrativo y se convierte en un asunto de carácter constitucional, que torna necesaria una decisión pronta, eficaz y que garantice la protección de los derechos fundamentales. // Lo anterior, en la medida en que tal y como se estableció en las Sentencias C-645 de 2017, C-588 de 2009, C-553 de 2010, C-249 de 2012 y SU-539 de 2012, el mérito es un principio fundante del Estado colombiano y del actual modelo democrático, en la medida en que tiene un triple fundamento histórico, conceptual y teleológico. En efecto, el principio del mérito se estableció en el ordenamiento jurídico con la finalidad de proscribir las prácticas

clientelistas, para garantizar un medio objetivo de acceso, permanencia y retiro del servicio público y, por último, para hacer efectivos otros derechos que encuentran garantía plena a través de éste, al tiempo que se materializan los principios de la función administrativa, previstos en el artículo 209 de la Constitución. (...)”.

Bajo esa comprensión, se concluye en la Sentencia T-340 de 2020, “*que la acción de tutela es procedente por vía de excepción para cuestionar actos administrativos dictados en desarrollo de un concurso de méritos, y que, más allá de la causal del perjuicio irremediable, cabe examinar la eficacia en concreto del medio existente y de la viabilidad sumaria de las medidas cautelares, teniendo en cuenta, como ya se dijo, la naturaleza de la disputa, los hechos del caso y su impacto respecto de derechos, principios o garantías constitucionales, siendo, prevalente, en este escenario, la protección del mérito como principio fundante del Estado colombiano y del actual modelo democrático”.*

F. EN EL CASO CONCRETO.

El accionante DEYMER DAVID VILLALBA LUNA acude a este mecanismo constitucional para el resguardo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, y al de acceso a cargos públicos. Sus pretensiones están orientadas a que se ordene a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC y la UNIVERSIDAD LIBRE procedan a asignarle una calificación de 65 puntos en la valoración de antecedentes. Adicionalmente, se solicita la corrección de la calificación en la sumatoria de los puntajes obtenidos en el concurso, la cual, al momento de este reclamo, se encuentra en 86.17 puntos, y que se ajuste a 86.67 puntos. Como consecuencia de ello, también indica se debe corregir la posición en el listado de puntajes de los aspirantes al empleo que aún continúan en el proceso de selección, la cual, en el momento de este reclamo, está ubicada en la posición 36, para que se le asigne la posición 14.

Al contestar la demanda la UNIVERSIDAD LIBRE informó que, en la Prueba de Valoración de Antecedentes en el factor de Educación Formal no finalizada, el aspirante debe aportar certificación en la que conste cuántos semestres ha aprobado y el certificado aportado señala que ya cursó todos los créditos del programa. Sin embargo, al no aportar el TÍTULO del programa, el certificado solo puede puntuar como Educación no finalizada, la cual para la formación técnica profesional da un máximo puntaje de 10 puntos.

A su vez, la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, expuso que no es procedente acceder a lo pretendido, ya que debe respetarse lo establecido en el Acuerdo del Proceso de Selección y su Anexo Técnico, toda vez que son las normas que regulan el concurso, las cuales son de obligatorio cumplimiento para todos los concursantes, entidades e instituciones que participen en este Proceso de Selección por Mérito, de conformidad con el numeral 1° del artículo 31 de la Ley 909 de 2004.

En ese orden, tal como se acreditó, la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, mediante Acuerdo No. 60 del 13 de julio de 2023, estableció las reglas del Proceso de Selección, en las modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva de la planta de personal perteneciente al Sistema Específico de Carrera Administrativa de las Superintendencias de la Administración Pública Nacional– Proceso de Selección No. 2502 de 2023 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.

En relación a la primera de las hipótesis, que exige la verificación de la existencia de otros medios judiciales idóneos y eficaces para restablecer de forma efectiva e integral los derechos invocados, está demostrado que el promotor del amparo presentó reclamación que se avizora a folio 26 a 28 de la contestación de UNIVERSIDAD LIBRE en contra de los resultados publicados de la Prueba de Valoración de Antecedentes, en el marco de los Proceso de Selección No. 2502 de 2023-SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, en la cual se confirma el puntaje de 60.00 publicado el 30 de diciembre de 2024, a fin de manifestar y solicitar reconsiderar el puntaje otorgado teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la reclamación y así cambiar el puesto en que se encuentra según la nueva puntuación. Pues, alega que cumple con los factores a evaluar en la valoración de antecedentes que se han indicado anteriormente”.

Ahora, si el actor estima que las actuaciones surtidas en el marco del concurso público presentan alguna irregularidad que vulnera sus derechos fundamentales, puede hacer uso de los medios de control ante la jurisdicción contenciosa administrativa para revisar la legalidad de tales actuaciones o alegar el correspondiente vicio de nulidad, lo cual constituye una herramienta procesal idónea, por cuanto permite dejar sin efectos la decisión que el tutelante considera contraria al debido proceso.

En lo que respecta al segundo supuesto, que admite la viabilidad de la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, entendido como aquel que se presenta cuando existe un menoscabo moral o material injustificado que es irreparable, debido a que el bien jurídicamente protegido se deteriora hasta el punto que ya no puede ser recuperado en su integridad², en el presente caso no se alegó la inminencia de un perjuicio de esta naturaleza como tampoco se acreditó su configuración, lo que imposibilitaría tramitar la petición de tutela para proteger transitoriamente las prerrogativas fundamentales que se alegan vulneradas.

En ese orden de ideas, al tratarse de una decisión tomada en el marco de un concurso público de méritos, según lo reglado en el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, es claro que la acción de tutela resulta improcedente, habida cuenta que el mecanismo idóneo para demandar la ilegalidad o

² Sentencia T-003 de 2022.

alegar el correspondiente vicio de nulidad del acto administrativo es a través de los medios de control ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, los cuales pueden ir acompañados de las medidas cautelares contempladas en la Ley 1437 del 2011 para mayor eficacia.

Así las cosas, se concluye que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que el accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial en el marco de los cuales puede formular sus pretensiones, por lo cual se declarará improcedente.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

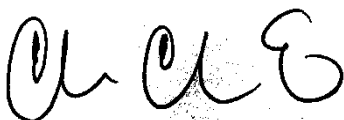
F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por **DEYMER DAVID VILLALBA LUNA** contra **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC Y LA UNIVERSIDAD LIBRE**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes como lo prevé el artículo 30 del D.L. 2591 de 1991. Se **ORDENA** a la **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC** y a la **Y LA UNIVERSIDAD LIBRE**, que realicen la publicación del presente fallo a través de sus portales web, a efectos de **NOTIFICAR** de él a los terceros con interés en la acción constitucional que hagan parte del proceso de selección de referencia.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es impugnado el fallo (artículo 32 Decreto 2591 de 1991).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ ESTRADA.
JUEZ